

ENCUENTROS

El avance de la globalización neoliberal: una comparación de tres campañas de movimientos populares en Centroamérica

Paul Almeida¹
Erica Walker²

A finales de los noventa y comienzos del año 2000, los sectores populares en América Central se involucraron en los más grandes actos de desafío masivo desde las luchas de liberación nacional protagonizadas a finales de los años setenta y comienzos de los ochenta³. En Panamá, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Honduras se siguen dando una serie de batallas contra la austeridad excesiva del gobierno y la reestructuración neoliberal, contribuyendo ello a un acelerado conflicto social. La agitación política se deriva de un nuevo giro por la integración de la región en el capitalismo mundial a lo largo de las líneas de mercados libres (Robinson, 2003). Debido a que los países del istmo entraron en una crisis por la deuda externa en los años ochentas, sus respectivos gobiernos ini-

1 Department of Sociology, Texas A&M University, College Station.
e-mail: almeida@tamu.edu

2 Estudiante de maestría en el *Department of Curriculum & Instruction, University of Wisconsin-Madison*, e-mail: ewalker2@wisc.edu

3 Este artículo fue publicado originalmente en inglés como “*The Pace of Neoliberal Globalization: A Comparison of Three Popular Movement Campaigns in Central America*,” en la revista norteamericana *Social Justice* 33(3): 175-190 (2006). Fue traducido por Ana Cristina Sánchez.

ciaron la fase uno con políticas de ajuste estructural, como devaluaciones de la moneda, cortes del subsidio a los bienes y servicios de consumo básico y desregulación económica (Stahler-Sholk, 1994). A medida que estas políticas contuvieron la inflación y condujeron a la activación de corto plazo del desarrollo económico, las repúblicas de América Central continuaron acumulando deudas externas, bordeando miles de millones de dólares estadounidenses durante los años noventas, mientras mantenían un déficit presupuestario interno significativo. A mediados de los noventas, en respuesta a esta crisis fiscal en curso, los institutos financieros internacionales (*International Financial Institutes, IFI*) promovieron una segunda fase de las reformas estructurales, que involucraron la privatización de los servicios de administración pública e infraestructura, reducciones más profundas en el sector público, y la puesta en práctica de impuestos regresivos al valor agregado para superar la escasez del presupuesto y asegurar los reembolsos de los préstamos (Green, 2003). Desde finales de los noventas, estas reformas de la segunda fase parecen dar forma a algunas de las luchas masivas dominantes en la región.

De hecho, en el 2005, Costa Rica, Guatemala, Honduras, y El Salvador experimentaron días nacionales de protesta contra la firma del tratado de libre comercio centroamericano (*Central American Free Trade Agreement, CAFTA*); una medida crítica que busca mayor integración de la región en el modelo neoliberal. Solo las movilizaciones en contra del CAFTA en Guatemala en marzo del 2005 condujeron a la creación de coaliciones entre asociaciones campesinas mayas y grupos de estudiantes universitarios, profesores de educación pública, sindicatos del sector público, y una variedad de organizaciones no gubernamentales (*ONG*) durante una serie de manifestaciones coordinadas a escala nacional que incluían bloqueos en las vías. En Panamá, entre mayo y julio del 2005, en otro tipo de conflicto político-neoliberal, los trabajadores de la construcción, los empleados públicos, los maestros, los estudiantes universitarios, los empleados del sector de la salud, y los trabajadores de la Caja de Seguro Social se unieron en una alianza de oposición que exigió la revocatoria de una ley de pensión nacional recién impuesta en la que se aumentó en cinco años la edad de la jubilación.

Al final, las fuerzas anti-CAFTA no pudieron evitar que sus respectivos gobiernos firmaran tratados de libre comercio (con la excepción de Costa Rica), mientras que la campaña en Panamá forzó al gobierno de Torrijos a postergar la reforma de pensión y a negociar con los sectores

sociales más afectados. ¿A qué se deben los diferentes resultados de las luchas populares tales como las anteriormente mencionadas que continúan disputando el carácter y el contenido de las reformas neoliberales en los países en desarrollo? Más adelante, examinamos tres campañas contra la puesta en práctica de las políticas neoliberales de la segunda fase en América Central para determinar mejor los diferentes tipos de situaciones en las cuales los movimientos que desafían las reformas inducidas por la globalización, influyen en el avance y el carácter del proceso de implementación de la política (véase el cuadro 1).

Cuadro 1

Tres campañas de protesta centroamericana contra la reforma neoliberal

Costa Rica	En 1995, las pensiones de los profesores eran amenazadas debido a las medidas de austeridad impuestas por el FMI; la coalición que desarrolló la campaña de protesta incluyó a profesores, estudiantes y trabajadores del sector público.
Nicaragua	Entre 1995 y 1997, el presupuesto de la Universidad fue reducido debido a las medidas de austeridad impuestas por el Banco Mundial y del FMI; la coalición que desarrolló la protesta incluyó a estudiantes y a administradores de la Universidad.
Guatemala	En el 2001, un nuevo impuesto al valor agregado (IVA) fue adoptado debido a las medidas de austeridad propuestas por el FMI; la coalición que llevó a cabo la protesta incluyó a la federación de trabajadores, los estudiantes universitarios, los campesinos indígenas y la Cámara de Comercio.

Las campañas representan algunas de las movilizaciones masivas más grandes en Centroamérica a finales de los noventas y comienzos del año 2000. Específicamente, examinamos el papel de la opinión pública, la magnitud de la movilización, y la alineación con los partidos políticos de oposición, como las dimensiones dominantes que condicionan el impacto de las campañas. Mientras que varios estudios demuestran un aumento

de protestas antiglobalización neoliberal en América Latina en los años ochentas (Walton y Shefner, 1994), los años noventas (López Maya, 1999), y comienzos del año 2000 (Almeida, 2002; Auyero, 2002; Shefner, Pasdirtz, y Blad 2006), sabemos menos sobre los relativos éxitos (o derrotas) de campañas específicas para rechazar las políticas económicas indeseadas (Rhodes, 2006).

1. Acción colectiva defensiva y resultados de los movimientos sociales

La reestructuración económica en América Central desde mediados de los años ochentas ha ejercido cada vez más presión en los gobiernos nacionales para disminuir los presupuestos federales y abrir las industrias y los servicios públicos a las fuerzas del mercado. Los cambios comenzaron frente a la crisis de la deuda internacional a comienzos de los años ochentas. Las instituciones financieras internacionales (IFI) se involucraron para mediar en la crisis a favor de los bancos del norte. A mediados de los años ochenta, las IFI tal como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (AID), negociaron la primera etapa de acuerdos de ajuste estructural con las repúblicas de América Central. A cambio de reducir los préstamos, crear nuevas líneas de crédito, y favorables escalas de créditos, los estados centroamericanos implementaron políticas de estabilización; estas a menudo incluyeron devaluación de la moneda, austeridad fiscal y congelaciones salariales. A medida que la crisis financiera llegaba a los años noventas, los funcionarios de los estados neoliberales iniciaron una segunda etapa de las reformas que a menudo incluían privatización de la infraestructura y de los servicios del gobierno, profundos recortes en el sector público e incremento del impuesto al valor agregado (ej. impuesto a las ventas). Ambas etapas de ajuste estructural han conducido a varios episodios de acción colectiva *defensiva* en la región. Es decir, los grupos de la sociedad civil afectados por las reformas han lanzado campañas de protesta para prevenir los cambios no deseados, los cuales son percibidos como factores que empeorarían su situación si es que las políticas son implementadas. En otras palabras, evitando los “males colectivos” (en oposición a los bienes colectivos) se proporcionan los incentivos contra la amenaza que conducen estas movilizaciones masivas. Algunas de las campañas anteriores contra

las reformas de la primera fase incluyen protestas masivas de los grupos barriales en Costa Rica en 1983 contra el fuerte incremento del precio de la electricidad por recortes del subsidio (Alvarenga Venutolo, 2005) y marchas laborales en El Salvador en 1986 contra nuevas reformas fiscales, incluyendo la devaluación de la moneda nacional aconsejada por el FMI.

A finales de los años noventas y comienzos del año 2000, varias decenas de campañas de protesta masiva emergieron en Centroamérica contra las nuevas reformas de estado y programas de privatización. De hecho, sin exageración, algunas de estas campañas contra la austeridad económica se registran como los más grandes actos de desobediencia civil atestiguados en la historia reciente de varios países en el istmo, y son definitivamente las manifestaciones más grandes de los años noventas y de comienzos del año 2000. Mientras que en la mayor parte del siglo XX (con posible excepción de Costa Rica), las luchas de los movimientos populares oscilaron entre la reforma y la revolución para remover las dictaduras firmemente atrincheradas y los regímenes militares, junto con la estructura feudal de economías de agro-exportación (Paige, 1997; Robinson, 2003), en los años noventas y comienzos del año 2000, las clases populares organizaron las protestas más grandes contra los cambios económicos no deseados ligados al proceso de globalización neoliberal.

En Costa Rica, la huelga de profesores en 1995 y la campaña de protesta en el 2000 contra la privatización de las telecomunicaciones y de la electricidad, implicaron cada una alrededor de 100.000 participantes y se consideran como las marchas de protesta más grandes en la historia reciente del país. La campaña contra un alza del impuesto a las ventas en Guatemala en el 2001 también movilizó decenas de miles de personas por toda la nación y sirvió como precursora a movilizaciones más grandes contra otro incremento del impuesto a las ventas en el 2004, así como movilizaciones contra un tratado de libre comercio en el 2005. Por lo tanto, solamente el nivel de participación popular hace que estos casos sean dignos de análisis. Nuestro propósito, sin embargo, no es explicar el nivel de movilización que estas diferentes reformas económicas dispararon, pero sí, en algo, sus resultados. En breve, posiblemente la pregunta más importante de la investigación sobre las acciones colectivas es, ¿en qué condiciones los movimientos tienen éxito o fallan? Aquí examinamos las circunstancias en las cuales los gobiernos nacionales, enfrentando la oposición popular, al implementar reformas neoliberales, cuando estas se obstruyen o incluso cuando éstas se revierten. Tal estudio aumenta nuestro entendi-

miento del avance de la reestructuración económica global en los países en desarrollo y de los temas directamente relacionados con la distribución social y económica. De hecho, el índice de la reforma neoliberal puede ser el modo más apropiado de estudiar los resultados de los movimientos de esta clase, puesto que una victoria contra una política particular en cierto momento puede conducir a la puesta en práctica de la medida en una fecha posterior. La mayoría de los países de Centro y Suramérica permanecen en una trayectoria de formulación de normas neoliberales; entonces, nuestras observaciones de los resultados de los movimientos se deben ajustar a la realidad en que los gobiernos, por razones de dependencia económica, estrategia económica y/o compromisos ideológicos, generalmente aprueban la mayoría de las medidas neoliberales (Almeida, 2007).⁴

2. El impacto de la opinión pública, magnitud de las movilizaciones y grupos de oposición

Incluso a finales de los años noventas y comienzos del año 2000, varios artículos empíricos y teóricos notables sobre las consecuencias de los movimientos populares, señalan que las investigaciones sobre los impactos de los movimientos sociales permanecen menos desarrolladas que los estudios que se centran en el reclutamiento del movimiento, la aparición, y los procesos de definición de la ideología (Giugni, 1998, 1999; Amenta y Young, 1999; Cress y Snow, 2000; Meyer, 2002; Stearns y Almeida, 2004; Jenkins y Form, 2005). Una manera de resolver este defecto en la literatura implica el centrarse en *los resultados* de las luchas del movimiento social. Los conflictos sociales sobre políticas neoliberales *específicas* ofrecen medios particularmente útiles para estudiar los resultados de los movimientos, debido a su naturaleza limitada y a sus características más fácilmente identificables. Por ejemplo, la privatización de una entidad pública pasa mediante la legislación o no pasa. Una nueva alza del impuesto a las ventas o entra en funcionamiento, o no entra. Tales resultados específicos son mucho más manejables empíricamente que los grandes resultados relacionados con el movimiento, tales como mayor equidad económica o justicia ambiental. No obstante, cada medida de austeridad se adiciona a una larga trayectoria de globalización neoliberal, de modo que una política puede

4 La reciente subida de gobiernos izquierdistas y populistas en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Chile, Nicaragua, Uruguay y Venezuela hacen del actual tema de la globalización neoliberal más que una pregunta abierta.

provocar luchas más amplias, que intenten retrasar el avance de tales reformas. Tres dimensiones centrales en la literatura de los movimientos sociales que se aplican a los resultados de la política neoliberal son: *opinión pública, magnitud de la movilización y alineaciones con los partidos políticos de oposición.*

La opinión pública desempeña un papel crítico en los resultados de la política en contextos democráticos, incluso en nuevas democracias como lo son la mayoría en Centroamérica. Los funcionarios elegidos en los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo pueden leer la opinión pública como señal empírica importante sobre cómo votar o actuar con respecto a una política particular (Burstein, 1999). Sin embargo, la opinión pública no es un fenómeno social fijo, libremente existente. Es formada claramente por los movimientos sociales, los medios de comunicación y las agencias de estado antes y durante los conflictos derivados de una política. El público en general puede necesitar experiencia con varios tipos de políticas neoliberales antes de abrigar sentimientos fuertes sobre una específica medida de austeridad. A menudo, los programas de austeridad económica y otras medidas de la liberalización pasan por medio del proceso político, con una pequeña oposición pública o incluso una conciencia pública.

En el caso de las privatizaciones, las instituciones, los servicios, y las empresas estatales que el público ve como corruptas, ineficaces, o que simplemente no lo afectan directamente, se pueden desmontar o vender fácilmente a inversionistas extranjeros y domésticos. No obstante, cuando las políticas de austeridad comienzan a afectar a una gran cantidad de gente y a múltiples sectores sociales, una ronda subsecuente de medidas similares levantará probablemente el nivel de la indignación popular. Conclusiones de Walton y Ragin (1990) apoyan esta aseercción con su estudio internacional de la protesta de austeridad. En su investigación, una variable crucial asociada con la intensidad de la protesta involucró el número de negociaciones y reestructuraciones que un país mantiene con instituciones financieras internacionales. Mientras más “presión del FMI” por programas de austeridad experimenta un país en vías de desarrollo, más probable será el desarrollo de protestas masivas. En algunos de los casos más notables (y más raros) en los cuales un gobierno latinoamericano celebró un plebiscito o un referendo de una medida de austeridad significativa, los ciudadanos rechazaron la medida, como en Ecuador en 1995 (privatización de la seguridad social y de otras empresas del Estado), Uruguay en el 2003 y 2004

(privatización de la refinación del petróleo y de la distribución del agua), y Bolivia en el 2004 (continúa privatización del gas natural). Mientras la opinión pública más se opone a una política de austeridad particular, más probable es que se acelere el paso de la movilización. Además, la difundida indignación pública contra una medida neoliberal particular refuerza las perspectivas de montar una coalición multisectorial para disputar activamente la política inminente (Reese, Geidraitis y Vega, 2005).

La magnitud de la movilización indica que se va más allá de un solo sector social, dando la impresión de un movimiento grande y unificado a los gobernantes. La unidad a gran escala ofrece dos de los cuatro ingredientes predominantes en el modelo WUNC (Valor, Unidad, Números y Compromiso: *Worthiness, Unity, Numbers, and Commitment*) de Tilly (1999). En términos de políticas neoliberales, tal como las reducciones de subsidios, nuevos impuestos y privatización de servicios e infraestructura, se producen grandes variaciones en términos del número de la gente afectada por la medida. Las alzas globales del impuesto de ventas afectan a la población entera y especialmente afectan de forma negativa a las clases populares (que apenas si pueden permitirse mercancías de consumo básico en el hogar). La privatización de la infraestructura, las utilidades y los servicios públicos, tales como telecomunicaciones, agua, corriente eléctrica y salud tienen impacto en gran cantidad de consumidores. Sin embargo, la austeridad fiscal aplicada a sectores sociales particulares como la educación, puede afectar directamente solo a poblaciones dentro de esos sectores, como son estudiantes y profesores.

La opinión pública contra una política neoliberal particular está más encaminada a formar una alianza multisectorial. Si un gran sector de la población discrepa de una política, el potencial de la movilización aumenta (Klandermans, 1997) debido a la fuente masiva y diversa que los organizadores y activistas pueden utilizar para reclutar miembros dentro de la sociedad civil. Una vez que una gran coalición multisectorial se materializa, establece grandes dificultades para que los legisladores y los representantes de estado continúen con su trayectoria neoliberal actual. Por ejemplo, en marzo del 2006, las organizaciones indígenas más grandes de Ecuador, representando las regiones de la Sierra, la Amazonía y la Costa, se unieron con los estudiantes y los sindicatos del sector público para impedir un acuerdo de liberación económica discretamente negociado con

los Estados Unidos. Sin las acciones masivas de la coalición, el tratado de liberalización comercial habría sido firmado mucho antes y dentro del mundo aislado de los círculos élite de legisladores, a diferencia de en un debate público abierto. En contraste, si solamente un sector se opone a una política neoliberal inminente, las élites políticas y económicas pueden aislar fácilmente ese sector y evitar sus preocupaciones simplemente por su propio interés (por ejemplo, los empleados en una empresa estatal que enfrentan la privatización).

Los partidos políticos de oposición están implicados cuando los movimientos involucran alianzas y coaliciones durante una campaña. Los lazos forjados con los partidos políticos pueden ser la alianza más importante en términos de resultados de una política (Almeida y Stearns, 1998; Stearns y Almeida, 2004). De hecho, los “aliados influyentes” forman un componente crucial en la estructura de las oportunidades políticas disponibles para los movimientos sociales (Tarrow, 1994; McAdam, 1996). Los partidos políticos prestan legitimidad a las demandas de los desafiantes de la austeridad, tomando su causa. Los partidos políticos de oposición permiten al movimiento acceso indirecto y directo a los círculos de negociación, incluyendo audiencias en comités legislativos y reuniones con los principales negociadores y los representantes legislativos. Los partidos políticos de la oposición pueden también llevar las demandas de los movimientos anti-austeridad, a la legislatura para una discusión de parlamento completo. Tales acciones internas sacan a relucir a la opinión pública los temas del debate y fuerzan a otros partidos políticos menos amistosos a tomar parte con mayor fuerza en la política particular. Por otra parte, gracias a su estatus político interno, los partidos políticos simpatizantes pueden dejar escapar información valiosa a los movimientos sociales activistas sobre un programa neoliberal inminente en el trámite legislativo. Finalmente, la mayoría de las políticas económicas en los estados democráticos necesitan la aprobación del congreso antes de que se decreten y se conviertan en ley.⁵ Por lo tanto, atraerse a algún partido político grande de oposición que puede impedir la legislación dentro del estado parecería ser la mayor meta

5 Sin embargo, dependiendo de la Constitución de un país, la rama ejecutiva puede tener especial autoridad para decretar leyes por medio de un decreto presidencial. El presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, publicó en mayo del 2001 un decreto que imponía un aumento en el impuesto de ventas aun después de que la legislatura se opusiera a la medida.

de los movimientos sociales que luchan contra la globalización neoliberal bajo regímenes los parlamentos elegidos (Almeida 2006).

El partido más poderoso es menos probable que se asocie con un movimiento social en el sentido en el que este llevó la reforma neoliberal a los círculos de negociación en primer lugar y además sirve de principal promotor de la medida (Stearns y Almeida, 2004). Un movimiento de oposición es mucho más probable que forme una alianza con un partido político de oposición (Kriesi *et al.*, 1995). La alianza entre el movimiento social y el partido político se puede forjar temprano en una campaña, o mucho después, una vez que el movimiento popular demuestre su músculo político, formando una coalición multisectorial dentro de la sociedad civil. Tal movilización a gran escala después motivará a los partidos políticos de oposición a actuar en favor del movimiento.

En resumen, cuando la opinión pública, las campañas multisectoriales y las alianzas con partidos políticos de la oposición actúan al son y se mueven en la misma dirección, estas condiciones servirían probablemente como las fuerzas primarias para retrasar el paso de la reforma neoliberal y de la reestructuración económica. Ocasionalmente, estos elementos críticos simplemente no se presentan a los grupos de la defensa del consumidor, los sindicatos y los activistas cívicos, sin importar cuánto traten de hacer notar su existencia. Más adelante en la comparación entre campañas de austeridad en Centroamérica, destacamos la manera en la cual la variable combinación de estas tres dimensiones afecta el índice del cambio neoliberal.

3. Tres campañas anti-neoliberales centroamericanas

Las siguientes campañas de protesta representan algunas de las batallas más grandes contra políticas neoliberales en Centroamérica entre mediados y finales de los años noventa y comienzos del año 2000. Estos polémicos episodios de ninguna manera ofrecen una lista exhaustiva de campañas en la región, pues varias otras campañas importantes han ocurrido desde este tiempo sobre situaciones similares. Seleccionamos estas campañas porque sus resultados varían e incorporan los tipos de políticas neoliberales encontradas a menudo en América Latina actual. Los casos simbolizan batallas en curso contra la globalización neoliberal y algunos

de los agentes de la sociedad civil que han sido de los principales protagonistas en tales luchas.

Profesores de Costa Rica 1995: En el primer trimestre de 1995, las principales asociaciones de profesores de Costa Rica (ANDE, APSE y SEC) enfrentaron una medida de ajuste del Gobierno que aumentó la edad de retiro de los educadores de 55 a 60 años de edad. El gobierno también cambió el sistema de pensión de los profesores del 100% de su sueldo final a un 80%, y exigió mayores contribuciones de su sueldo mensual para financiar el sistema de retiro (Menjívar Ochoa, 1999). Desde comienzos de los años ochentas, el país había experimentado varias rondas de austeridad económica conectadas con la crisis de la deuda externa. El gobierno central redujo radicalmente el presupuesto para la educación pública de un 34,5% de gasto social en 1982 a un 24,4% en 1991 (Trejos y Valverde, 1995: 16). En el primer trimestre de 1995, el estado de Costa Rica continuó decretando medidas de austeridad. El Gobierno seguía bajo presión del exterior para reducir su déficit presupuestario doméstico de 8% a 3,5%. En febrero de 1995, el Banco Mundial canceló un préstamo \$100 millones cuando el gobierno no pudo hacer suficientes reducciones en el sector público (Sandoval Coto, 1995). A finales de abril de 1995, el partido dominante PLN firmó un pacto con el partido de oposición PUSC –los dos partidos políticos dominantes en Costa Rica, que controlaban 53 de los 57 puestos parlamentarios- para implementar una serie de medidas de austeridad (conocidas como “Pacto Figueres-Calderón” debido a los líderes de los dos partidos hegemónicos) (Cedeño Castro, 1995). Uno de los primeros resultados del pacto fue el paso rápido de la reforma de pensión de los profesores públicos (Ley 7531) el 9 de julio 1995, con 40 votos combinados de ambas partes. La reforma de la pensión fue solicitada específicamente como una condición para recibir un préstamo en espera del FMI (Calvo Coin, 1995). La medida también sirvió como componente integral del tercer más importante programa de ajuste estructural de Costa Rica desde comienzos de los años ochentas (conocido como PAE III) (Rodríguez Molina, 2000: 4). El parlamento aprobó la legislación mientras los profesores estaban en vacaciones.

Inmediatamente, esto se consideró como la mayor violación de sus derechos constitucionales, de manera que las tres asociaciones de los profesores, organizadas bajo el Frente de Organizaciones Magisteriales (FOM), alineadas con otras 33 organizaciones (mayormente de trabajadores públi-

cos) en el Comité Cívico Nacional (CCN), lucharon contra la política de la pensión y otras medidas de ajuste que se rumoraba estarían en trámite (Herrera, 1995). El FOM estaba compuesto de asociaciones y uniones de profesores que se formaron durante el período del desarrollo del estado entre los años 1940 y los años 1970 (Trejos y Valverde, 1995). Los sindicatos y las asociaciones de trabajadores de Costa Rica tienden a ser pequeños, con el 60% de sindicatos que mantienen 100 miembros o menos (*Ibid.*). Por lo tanto, las tres principales asociaciones de los profesores representan algunas de las organizaciones de trabajadores más grandes del país.

El 17 de julio, en reacción a la ley de reforma de pensión, unos 50.000 profesores inauguraron el nuevo año escolar con una huelga nacional que afectó a 700.000 estudiantes. Los profesores se aseguraron la colaboración de las cuatro principales universidades públicas del país, que se unieron a la huelga en solidaridad. El Presidente, el Ministro de Educación Pública, y el Ministro de Trabajo rechazaron negociar con los profesores hasta que levantaran la huelga y advirtieron claramente a los educadores públicos que la ley de pensión no sería discutida en ningún diálogo futuro. También amenazaron con despedir a otros sindicalistas del sector público en el CCN si se unían en huelgas o acciones de solidaridad. El FOM llevó a cabo una huelga de 37 días para resistir la medida. La huelga llegó a su punto máximo el 7 de agosto, cuando los líderes de la huelga y el comité cívico nacional de trabajadores públicos (CCN) convocaron a la mayor manifestación callejera en décadas (Dobles Oropeza, 1995), alcanzando aproximadamente 120.000 participantes. La histórica marcha terminó frente a la Casa presidencial en Zapote. Por la tarde, unidades de policía antimotines reprimieron a los protestantes que permanecían frente a la Casa Presidencial. La represión indignó al público costarricense, que se enorgullece de su reputación no violenta.

El 16 de agosto de 1995, los líderes de la huelga firmaron un acuerdo con el gobierno de Costa Rica que permitió que las medidas permanecieran dentro de la ley (Sandoval Coto 1995). Esto creó profundas divisiones (que continúan hoy en día) en el movimiento de los educadores públicos. Los profesores no pudieron formar una coalición que fuera más allá de las del sector público -sus aliados naturales y el grupo más afectado por el Pacto Figueres-Calderón y las medidas de austeridad-. Aunque varios sindicatos del sector público, organizados bajo la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) y el CCN mostraron cierta simpatía con las huelgas y se unieron a las marchas callejeras, estos no pudieron partici-

par en la huelga general más grande convocada por algunos líderes del movimiento. Ni el dominante partido social demócrata PLN (con mayoría de diputados en el congreso) ni la Unidad Social Cristiana de oposición (PUSC) apoyaron a los profesores. La opinión pública favoreció levemente a los profesores, pero ese pareció ser el límite dentro de los sindicatos del sector público, en términos de arriesgarse a una desobediencia civil masiva para salvar el plan de jubilación para los educadores públicos. Al inicio de la huelga, en un estudio nacional de 310 participantes, el 51% indicó que las demandas de los profesores eran justas o muy justas, mientras que solamente 19,4% las declaró como injustificadas. Sin embargo, casi el 80% discreparon del uso de la protesta disruptiva, mientras que solamente 13,7% estuvo de acuerdo.⁶ En fin, la reestructuración de un sistema de pensión relativamente favorable (de acuerdo con los estándares costarricenses) para los profesores de instituciones educativas a la formación de una coalición multisectorial fuerte y unificada que lograra desarrollar esta lucha.

Estudiantes universitarios de Nicaragua, 1995-1997: Después de una década de gobierno sandinista desde 1979, el FSLN abandonó el poder en 1990, después de perder las elecciones presidenciales. El artículo 125 de la Constitución nicaragüense bajo el FSLN establecía que 6% del presupuesto total del gobierno debería ser asignado a la educación superior. El gobierno centro-derechista de Violeta Barrios de Chamorro asumió el poder con una deuda externa de \$10.000 millones e inició inmediatamente múltiples programas de ajuste estructural que incentivaron durante inicios de los años noventas varias movilizaciones masivas de sindicatos y otros sectores (campesinos, funcionarios, etc.) que ya habían sido estructuradas bajo la organización sandinista (Stahler-Sholk, 1994). En este clima político de contracción del sector público y del ajuste neoliberal, que fue fomentado por el Banco Mundial y el FMI, la administración de Chamorro comenzó a implementar la austeridad fiscal en el sector educativo en 1991 y 1992.

El gobierno de Chamorro (1990 a 1996) asignaba constantemente en el sistema universitario nacional mucho menos que el 6% estipulado. A mediados de 1992, la comunidad universitaria emprendió demostraciones callejeras hasta que la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo ratificaron nuevamente que el seis por ciento del presupuesto público se asig-

6 Véase "Apoyo a reclamo de educadores" (*La Nación*, 21 de julio del 1995: 5).

nara a las universidades (Roberto y Ruiz Carrión, 1997). En septiembre 1995, la presidente Chamorro firmó un acuerdo con el FMI en el marco del cual, el gobierno nicaragüense acordó que negociaría el presupuesto universitario con la asamblea legislativa, de manera que calcularía el seis por ciento del presupuesto nacional para las universidades a partir de ingresos nacionales y no de ingresos o prestaciones internacionales

El 15 de octubre de 1995, según lo estipulado por la Constitución nicaragüense, el gobierno de Chamorro entregó su oferta de presupuesto para 1996 a la Asamblea Legislativa para proceder con su ratificación. El presupuesto desfinanció a las universidades al ofrecer solamente 4,2% para la educación y no pudo pagar una deuda de 38 millones de córdobas (Marengo Tercero, 1995). A finales de octubre de 1995, las principales movilizaciones ocurrieron en la comunidad universitaria nicaragüense para exigir que el gobierno central entregaría completo el 6% del presupuesto, incluyendo cálculos que implican ayuda extranjera y el dinero que se debía de años anteriores. Una organización de administradores universitarios de los principales institutos de educación superior del país -Consejo Nacional de Universidades (CNU)- y la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios de Nicaragua (UNEN) se unieron en una coalición para luchar contra los cortes presupuestarios dentro del sistema universitario nacional. La población de la universidad ascendió a aproximadamente 40.000 estudiantes a mediados de los años noventa. Las protestas implicaron docenas de marchas callejeras y de acciones disruptivas, tales como huelgas de hambre, ocupaciones del aeropuerto internacional y de los ministerios de Finanzas y de Relaciones Exteriores, así como varias barricadas en Managua y en autopistas nacionales.

El 13 de diciembre de 1995, grupos policiales reprimieron brutalmente una marcha masiva de estudiantes universitarios que se dirigían a la Asamblea Legislativa durante un debate sobre el presupuesto nacional, dando como resultado la muerte de un estudiante y de un trabajador de la universidad, así como 43 heridos graves.⁷ A mediados de la crisis, el 15 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó la versión del presupuesto de Chamorro. El paso de un presupuesto educativo de menos de 6% y la represión policíaca acarrearón más manifestaciones masivas en diciembre, enero y febrero. El movimiento universitario parecía no haber movido con

7 Véase *La Barricada* (14 de diciembre de 1995: 1; 3) Una de los fallecidos fue Jerónimo Urbina Jarquín de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). El otro fallecido fue Ernesto Porfirio Ramos, un sindicalista y conductor de tractor de la Universidad Agrícola Internacional en Rivas. Véase *La Barricada* (14 de diciembre de 1995: 1; 8)

eficacia la opinión pública, aunque no existen sondeos de opinión. Para compensar esta carencia de una mayor ayuda pública, los estudiantes y los administradores de la Universidad actuaron como la base del movimiento para incrementar el presupuesto. La campaña del presupuesto de la universidad ocasionalmente movilizaba grupos barriales, pero no pudo formar una alianza multisectorial más grande. Además, el Gobierno lanzó una importante campaña publicitaria contra la comunidad universitaria, caracterizando la crisis como juego de suma-cero en el que los escasos ingresos y recursos públicos eran quitados de la educación primaria para financiar una burocracia universitaria ineficaz.

Sin embargo, la comunidad de la Universidad gozó de la ayuda del más grande partido político de oposición en el parlamento: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).⁸ El movimiento universitario y el FSLN pusieron suficiente presión en la legislatura para conseguir un presupuesto más favorable para la universidad aprobado el 13 de abril de 1996 (Consejo Nacional de Universidades, 2004), pero la presidenta Chamorro vetó el decreto (Ley 218) el 10 de mayo. El FSLN mantuvo el tema del presupuesto en debate legislativo y finalmente ganó una concesión importante el 7 de agosto de 1996, para aumentar el financiamiento al sistema universitario. Con los estudiantes de la Universidad rodeando la Asamblea Legislativa, el FSLN y los disidentes legislativos (del partido difunto predominante, UNO) votaron 56 a 17 para volcar el veto de la Presidenta en el presupuesto universitario y aseguraron el 6% completo del financiamiento (Alonso y Carazo, 1996). Durante la campaña 1995-1996 de protesta del presupuesto universitario, el FSLN mantuvo 38 de los 90 puestos parlamentarios.

El tema emergió nuevamente en abril de 1997, cuando el nuevo gobernante Arnoldo Alemán (del dominante Partido Liberal) vetó el seis por ciento para la educación superior después de que la Asamblea Legislativa la hubiera aprobado en marzo con una estrecha mayoría de 47 votos de 93. En la campaña de 1997, el FSLN controló 37 de 93 puestos legislativos.

8 Antes, en esta ronda de luchas presupuestarias universitarias, un líder estudiantil comentó a la prensa nacional que el FSLN era “el único partido que desde el principio nos ha apoyado siempre en las protestas por obtener el 6 por ciento del presupuesto” (en Sánchez Paz, 1995: 11). En mayo de 1996, la comunidad universitaria, incluyendo a la UNEN y al CNU, patrocinó una ceremonia especial que públicamente reconoció a instituciones específicas que asistieron a su lucha para un mejor presupuesto universitario. Junto con el periódico prosandinista, *La Barricada*, y una cooperativa de buses prosandinista, el partido político sandinista (FSLN) fue honrado (Meléndez, 1996).

La Asamblea Legislativa entonces dio un vuelco de 180° y retornó a lo anterior al veto de Alemán (Palazio Galo, n.d.). Después de varias movilizaciones masivas entre abril y julio de 1997, Alemán cedió parcialmente y destinó el 6% para las universidades nicaragüenses después de intensas negociaciones con el CNU, donde las asignaciones presupuestarias no fueron tomadas de la ayuda internacional tal y como la comunidad universitaria deseaba. En algunas de las protestas callejeras, los legisladores del FSLN estaban presentes e incluso recibieron heridas durante las severas represiones policiales.⁹

Nicaragua mantiene uno de los sistemas universitarios públicos más extensos y diversos de Centroamérica. En toda la región, incluyendo a Nicaragua, las universidades privadas han proliferado desde los años ochentas. Debido a la deuda externa del país, la más grande de América Central al momento, simplemente el mantener intacta a la Universidad Nacional es una gran victoria para el movimiento del presupuesto de la universidad en los años 90, incluso cuando la comunidad universitaria no pudo recibir la totalidad de los fondos que solicitó. Una parte importante de la misión del sistema universitario público implica el asegurar miles de becas para los estudiantes talentosos de la población nicaragüense (en su mayoría pobres). Privatizar la educación superior habría aumentado grandemente la inequidad educativa en el país (entrevista del primer autor con el principal representante del Consejo Nacional de Universidades [CNU], Managua, 8 de agosto del 2002).

Alza del impuesto de ventas en Guatemala en el 2001: El aumento del impuesto nacional de ventas es una reforma neoliberal común decretada en América Latina para aumentar los ingresos del gobierno, compensar el déficit presupuestario y financiar los reembolsos de los préstamos (Mahon, 2004). Entre mayo y julio del 2001, el Gobierno guatemalteco discutió y pasó tal aumento del 10 al 12% del impuesto de ventas. La federación guatemalteca de trabajadores (CGTG) junto con los estudiantes universitarios, las organizaciones comunitarias, la asociación de profesores escolares pú-

9 Por un motivo de brevedad y claridad analítica, solo presentamos la campaña de presupuesto universitario entre 1995 y 1997. La crisis del presupuesto, debido a su relación integral con el presupuesto anual del Gobierno, seguía siendo una importante fuente de conflicto social a inicios del año 2000. Grandes acuerdos fueron firmados entre el gobierno y los administradores de la universidad entre 1999 y 2004; sin embargo, estos comprometieron el nivel de conflictos en los años precedentes a los acuerdos (Consejo Nacional de Universidades, 2004).

blicos, los trabajadores del sector informal y la Cámara de Comercio guatemalteca formaron una alianza para resistir los cambios no deseados. La opinión pública estaba terminantemente en contra del alza del impuesto de ventas.¹⁰ La coalición de oposición convocó a las mayores protestas masivas ocurridas desde el reciente final de la guerra civil (de baja intensidad) en diciembre de 1996. Comenzando en mayo, cada viernes la campaña antiimpuestos celebraba una reunión en la plaza del Obelisco en la Ciudad de Guatemala. Las marchas masivas, las huelgas cívicas y las acciones coordinadas ocurrieron en docenas de ciudades, incluyendo los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz, Izabal, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Sololá, Suchitepéquez y Totonicapán. A finales de junio, unas 50 organizaciones cívicas formaron una alianza (llamada Asamblea de la Sociedad Civil) para resistir el alza del impuesto.

El principal partido fraternal al movimiento era el Alianza Nueva Nación (ANN), que ocupaba menos del 10% de los puestos legislativos (nueve de 113). Además, el partido Unidad Nacional de Esperanza (UNE) estaba firme contra las reformas. Ambos partidos persuadieron al partido más grande de oposición, el PAN, a abstenerse de votar en favor del nuevo incremento del impuesto.¹¹ Sin embargo, la Asamblea Legislativa aprobó el nuevo aumento del impuesto el 26 de julio del 2001, con una votación de 65 a 0 (todos los partidos disidentes de oposición se abstuvieron en señal de protesta).¹² El dominante partido Frente Republicano Guatemalteco (FRG), dirigido en la asamblea nacional por el antiguo dictador militar Efraín Ríos Montt, aprobó la ley con la ayuda del mucho más pequeño Partido Democrático Cristiano y el Partido de la Unión Democrática (cada uno proporcionó un voto). Así, el FRG manejó la presidencia, con Alfonso Portillo, y al parlamento (con una mayoría absoluta de 63 puestos) a la hora del alza del impuesto. En respuesta, la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) redobló sus esfuerzos y coordinó protestas masivas en los días

10 En una encuesta conducida por un periódico guatemalteco, se preguntó a los invitados si apoyaron la huelga nacional del primero de agosto en oposición al alza del impuesto; 5.522 respuestas válidas fueron calculadas, con el 93% apoyando la huelga y 7% que se oponía. Véase "Apoyo a paro nacional" (*Prensa Libre*, 1 de agosto del 2001).

11 Sin embargo, las credenciales antineoliberales del PAN demostraron ser débiles puesto que era el anterior partido poderoso e iniciaron varios programas de privatización (incluyendo telecomunicaciones del estado) bajo el mandato del presidente Álvaro Arzú (1995-1999). Así, el PAN y el movimiento popular no pudieron formar lazos, aunque se actuaba en su favor, absteniéndose del voto y llamando a un referéndum popular.

12 Véase "Aprueban el IVA" (*Prensa Libre*, 27 de julio del 2001).

subsiguientes a la aprobación del impuesto de ventas. El 1 de agosto del 2001, el ASC, junto con la Cámara de Comercio, llevó a cabo una huelga nacional de 24 horas (denominada “Día de la Dignidad Nacional”), que incluyó una marcha masiva de entre 20.000 y 50.000 personas en la capital, y acontecimientos de protesta en las 22 provincias del país. Muchos manifestantes vistieron de negro como símbolo de luto nacional. Los corresponsales del periódico en la escena divulgaron que los manifestantes cantaban quejas en rima como: “El Alto Costo de Vida, al Pueblo Deja sin Comida “ y “La Canasta Básica Aumenta, y los Sueldos No se Incrementan” (Ramírez, 2001). Una fracción de la oposición comenzó una huelga de hambre delante del Tribunal Supremo, con la esperanza de que la ley fuera declarada inconstitucional. Las personas en huelga de hambre recogieron 50.000 firmas que se oponían al alza del impuesto. A inicios de septiembre, las protestas se acabaron y la nueva ley de impuesto se hizo efectiva.

4. Resumen y Conclusiones

El cuadro 2 resume los casos examinados en este estudio. Patrones importantes emergen en nuestra comparación de tres campañas de protesta anti-neoliberal. Como mínimo, aunque no sea una condición suficiente, parece ser que una campaña exitosa necesita aliarse con un fuerte partido político de oposición. Un partido pequeño o débil puede ayudar a ejercer presión dentro del parlamento y a sacar información importante para el movimiento. Sin embargo, para prevenir o para volcar una ley neoliberal desfavorable, se necesita, en algún punto, de un partido político de oposición más grande. En Nicaragua, el FSLN desempeñó el papel de un partido fuerte de oposición que apoyaba el movimiento del presupuesto de la universidad. En las campañas menos exitosas en Costa Rica y Guatemala, los movimientos no pudieron ligarse a un partido político fuerte de oposición. En el caso de las reformas de pensión de los maestros de Costa Rica, los dos partidos políticos dominantes (PLN y PUSC) hicieron un pacto para implementar conjuntamente las leyes neoliberales, dejando a pocos aliados dentro de la legislatura con los cuales los educadores públicos pudieran alinearse. La campaña de protesta de los profesores y los sindicatos del sector público no pudieron crear una división en el pacto político de élite. La campaña contra el impuesto de ventas guatemalteco tampoco pudo alcanzar la ayuda de la mayoría dentro de la legislatura, a pesar de

protestas masivas de la sociedad civil a lo largo del territorio nacional. El partido dominante FRG, con su mayoría absoluta en la legislatura, seguía empeñado en implementar la medida neoliberal que emanaba del Poder Ejecutivo controlado por el mismo partido.

Cuadro 2

Medidas de austeridad y resultados de las campañas

Costa Rica	En 1995, las leyes sobre el retiro de los profesores fueron reestructuradas, hubo una mínima reacción en la opinión pública; la magnitud de la coalición comprendía al sector educativo, mientras que los partidos políticos de oposición no estaban presentes; el resultado fue negativo (la ley del retiro fue puesta en ejecución).
Nicaragua	De 1995 a 1997, los cortes en el presupuesto universitario sobrellevaron la indiferencia pública; la magnitud de la coalición comprendía al sector educativo y los partidos políticos de oposición que eran fuertes, dando por resultado un éxito parcial (financiamiento sostenido).
Guatemala	En el 2001, un nuevo impuesto de ventas (IVA) fue impuesto, hubo una fuerte reacción pública contra la política; la magnitud de la coalición comprendía múltiples sectores en la sociedad civil, mientras que los partidos políticos de oposición eran débiles; el resultado fue negativo (el IVA fue puesto en ejecución).

La opinión pública sí parece ser importante en los tres casos. La opinión pública contra las medidas neoliberales fue la más fuerte en el caso del alza del impuesto de ventas en Guatemala. Esto ayudó a desarrollar grandes coaliciones multisectoriales porque los temas afectaban a varios grupos de la sociedad civil. Sin embargo, el movimiento guatemalteco no pudo persuadir a miembros legislativos del FRG a enfrentarse con el partido y ponerse en contra del aumento del impuesto de ventas. En el caso de los profesores de Costa Rica y de los estudiantes universitarios

nicaragüenses, las medidas neoliberales demostraron ser específicas en cada sector (en gran parte afectaba a un solo sector social). La comunidad nicaragüense universitaria superó este déficit con prolongadas campañas de protestas beligerantes, con una gran participación y compromiso estudiantil, mientras que mantenía su alianza histórica con el partido de oposición FSLN (el más grande del parlamento). Ocasionalmente, se persuadió a ciertos legisladores a romper con el partido (en poder y voto) en favor de la comunidad universitaria. Por lo tanto, las estrategias y las tácticas pueden ser otra consideración importante cuando se investigan los resultados de los conflictos inducidos por la política neoliberal. Los profesores costarricenses no pudieron superar las debilidades específicas de su sector; no se alinearon con otros grupos fuera del sector público o con algún partido político de oposición y su campaña terminó con profundas divisiones internas. Los profesores no pudieron generar mayores niveles de compromiso de sus simpatizantes y de sus aliados para implicarse en una lucha más larga y/o pudieron haber terminado sus campañas de protesta prematuramente.

Futuros estudios deben centrarse en el papel de la opinión pública en el condicionamiento de la diversidad de la coalición de oposición. Un estudio con más casos también sería útil en la determinación de cuánto contribuye la opinión pública al resultado final de la política, más allá de permitir una coalición multisectorial. Por ejemplo, un año de elecciones sería probablemente un tiempo riesgoso para promulgar una reforma neoliberal de la que mucho del público está enterado y se opone. Los diseños que incorporarán un gran número de casos podrían servir a estudios y a grupos civiles de la sociedad sobre otros temas relacionados que no se examinan en el presente estudio. Tales estudios incluirían el alcance de la población afectada por las reformas, el nivel de la interrupción usado por los movimientos de oposición y la experiencia de la población con anteriores reformas neoliberales (por ejemplo: si se subieron los precios, si se compensó a los partidos afectados, si se vieron por el público como legítimos y justificables, etc.).

Las luchas populares citadas ofrecen importantes lecciones para casos y conflictos similares que ocurren dentro del cambiante mundo en el contexto de las reformas neoliberales de la segunda fase. Los movimientos que se pueden beneficiar del apoyo de la opinión pública deben utilizar un clima político favorable para atraer varios sectores sociales a la lucha. En

este esfuerzo, los activistas de la sociedad civil y los grupos de defensa del consumidor deben considerar el incorporar a los partidos políticos simpatizantes, que pueden abogar dentro y fuera del Estado contra la inminente legislación neoliberal. Los movimientos que se han beneficiado de la opinión pública favorable, se han movilizado extensamente a través de los sectores y del territorio nacional, y se han alineado con un partido eficaz de oposición, probablemente podrán revocar las reformas más rápidamente que las campañas que carecen de estas características (o al menos, una lucha que presente tales características, puede forzar a una discusión pública más amplia del tema en cuestión).

Bibliografía

- Almeida, Paul D. (2002): “Los Movimientos Populares contra las Políticas de Austeridad Económica en América Latina entre 1996 y 2001.” *Realidad: Revista de Ciencias Sociales y Humanidades* N.º 86 (marzo-abril).
- _____(2006): “Social Movement Unionism, Social Movement Partyism, and Policy Outcomes.” Pp. 57-73 in H. Johnston and P. Almeida, (eds): *Latin American Social Movements: Globalization, Democratization, and Transnational Networks*, (Lanham, MD, Rowman and Littlefield).
- _____(2007): “Defensive Mobilization: Popular Movements against Economic Adjustment Policies in Latin America.” *Latin American Perspectives*. Vol. 3. N.º 34.
- Almeida, Paul D., and Brewster Stearns (1998): “Political Opportunities and Local Grass-roots Environmental Movements: The Case of Minamata.” *Social Problems* N.º 45.
- Alonso, and Carazo, M. (1996): “Diputados rechazaron veto.” *La Prensa*, August 8, 1996, p. 2.
- Alvarenga Venutolo, P. (2005): *De Vecinos a Ciudadanos* (San José, Editorial de la Universidad de Costa Rica).
- Amenta, E. and Young, M. (1999): “Making an Impact: Conceptual and Methodological Implications of the Collective Goods Criterion”, in M. Giugni, D. McAdam, and C. Tilly, (eds.): *How Social Movements Matter* (Minneapolis: University of Minnesota Press).
- Auyero, J. (2002): *La Protesta: Retratos de la Beligerancia Popular en la Argentina Democrática* (Buenos Aires, Libros del Rojas-Universidad de Buenos Aires).

- Burstein, P. (1999): "Social Movements and Public Policy.", in M. Giugni, D. McAdam, and C. Tilly, (eds): ***How Social Movements Matter*** (Minneapolis, University of Minnesota Press).
- Calvo Coin, L. A. (1995): "La Política Económica Neoliberal o Neoclásica Actual y su Aplicación en Costa Rica.", ***Ciencias Sociales*** N.º 70.
- Cedeño Castro, R. (1995) "La Huelga Magisterial de Julio-Agosto de 1995: Los Trabajadores en Lucha contra La Exclusión y El Hambre." ***Abra*** 21-22: 113-126.
- Consejo Nacional de Universidades (2004): "Memoria: Del 2% al 6%." ***Universidad y Sociedad*** N.º 16 Año VI.
- Cress, D. and Snow, D. (1999): "The Outcomes of Homeless Mobilization: The Influence of Organization, Disruption, Political Mediation, and Framing", ***American Journal of Sociology*** Vol. 4, N.º 105.
- Dobles Oropeza, I. (1995): "La Huelga del Magisterio." ***Cuadernos Sindicales*** Vol. 1 N.º 2.
- Giugni, M. (1998): "Was it Worth the Effort? The Outcomes and Consequences of Social Movements", ***Annual Review of Sociology***, N.º 24.
- _____ (1999): "How Social Movements Matter: Past Research, Present Problems, Future Developments.", in M. Giugni, D. McAdam, and C. Tilly, (eds.): ***How Social Movements Matter*** (Minneapolis, University of Minnesota Press).
- Green, D. (2003): ***Silent Revolution: The Rise and Crisis of Market Economics in Latin America***, (London, Latin American Bureau).
- Herrera, M. (1995): "Crece Pugna por Huelga." ***La Nación***, julio 19, 1995, p. 5.
- Jenkins, J. Craig, and Form, W. (2005): "Social Movements and Social Change", in Janoski, R. Alford, A. Hicks, and M. Schwartz, (eds.):

The Handbook of Political Sociology: States, Civil Societies, and Globalization (T. New York, Cambridge University Press).

Klandermans, B. (1997): ***The Social Psychology of Protest*** (Oxford, Blackwell Publishers).

Kriesi, H.; Ruud, K.; Willem Duyvendak, J. and Giugni, M. (1995): ***New Social Movements in Western Europe: A Comparative Analysis***, (Minneapolis: University of Minnesota Press).

López Maya, M. (1999): ***Lucha Popular, Democracia, Neoliberalismo: Protesta Popular en América Latina en los Años de Ajuste*** (Caracas, Editorial Nueva Sociedad).

Mahon, James E. (2004): “Causes of Tax Reform in Latin America, 1975-1995.” ***Latin America Research Review*** Vol 39, N.º 1.

Marengo Tercero, E. (1995): “Estudiantes a las calles.” ***La Barricada***, October 18, 1995, pp. 1 y 9.

McAdam, Doug. (1996): “Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions” in Doug McAdam, John D. McCarthy, and Mayer N. Zald (eds.): ***Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings***, (Cambridge: Cambridge University Press).

Meléndez, M. (1996): “CNU entrega reconocimientos.” ***La Barricada***, mayo 1, 1996, p. 8.

Menjívar Ochoa, M. (1999): “La Otra Sociedad Civil: Acción Política Magisterial entre la Hegemonía y La Alteridad.” ***Tesis de Maestría***, Programa de Estudios de Posgrado en Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica.

Meyer, D. S. (2002): “Opportunities and Identities: Bridge-Building in the Study of Social Movements.”, in D.S. Meyer, N. Whittier, and B. Robnett (eds.):, ***Social Movements: Identity, Culture, and the State*** (Oxford, Oxford University Press).

- Paige, J. (1997): *Coffee and Power: Revolution and the Rise of Democracy in Central America* (Cambridge, Harvard University Press).
- Palazio Galo, E. (n.d.): "Movimiento Estudiantil y la Autonomía Universitaria(...) Una Historia Hecha con la Participación de Todos." M.S.
- Ramírez, A. (2001): "Masiva Protesta contra Gobierno." *Prensa Libre*, agosto 2.
- Reese, E., Geidraitis, V. and Vega, E. (2005): "Mobilization and Threat: Campaigns against Welfare Privatization in Four Cities", *Sociological Focus* Vol. 38, N.º 4.
- Rhodes, S. (2006): *Social Movements and Free-Market Capitalism: Telecommunications Privatization and the Rise of Consumer Protest, Albany*, (New York State, University of New York Press).
- Robert, F. A. and Ruiz Carrión, R. (1997): "La Educación en Nicaragua Bajo El Neoliberalismo", *Universitas 2000* Vol. 21, N.º 1.
- Robinson, W. (2003): *Transnational Conflicts: Central America, Social Change, and Globalization*, (London, Verso).
- Rodríguez Molina, M. (2000): "Protesta Social y Pacto Figueres-Calderón: Modalidades Discursivas Sobre la Huelga de Educadores en los diarios *La Nación* y *La República*." *Paper Presented at the V Congreso Centroamericano de Historia*. San Salvador, El Salvador (julio).
- Sánchez Paz, M. (1995): "Lucha va en enero." *La Barricada*, diciembre 23, 1995, pp. 1 and 11.
- Sandoval Coto, M. (1995): "Las lecciones de la huelga de los educadores." *ABRA* 21-22: 127-139.
- Shefner, Jon, George Pasdirtz, and Cory Blad. (2006): "Austerity Protests

and Immiserating Growth in Mexico and Argentina.” in H. Johnston and P. Almeida, (eds.): ***Latin American Social Movements: Globalization, Democratization, and Transnational Networks***, (Lanham, MD/ Rowman & Littlefield).

Stahler-Sholk, R. (1994): “El ajuste neoliberal y sus opciones: la respuesta del movimiento sindical nicaragüense.” ***Revista Mexicana de Sociología*** Vol. 56, N.º 3.

Stearns, Linda Brewster and D. Almeida, P. 2004. “The Formation of State Actor-Social Movement Coalitions and Favorable Policy Outcomes.” ***Social Problems*** Vol. 51, N.º 4.

Tarrow, Sidney. (1994): ***Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics***, (Cambridge, Cambridge University Press).

Tilly, Ch. (1999): “From Interactions to Outcomes in Social Movements.”, in M. Giugni, D. McAdam, and C. Tilly, (eds.): ***How Social Movements Matter***, (Minneapolis, University of Minnesota Press).

Trejos, M. and Valverde, J. (1995): ***Las Organizaciones del Magisterio Frente al Ajuste***, (San José, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Walton, J. and Ragin, Ch. (1990): “Global and National Sources of Political Protest: Third World Responses to the Debt Crisis.” ***American Sociological Review*** N.º 55.

Walton, J. and Shefner, J. (1994): “Latin America: Popular Protest and the State.” in J. Walton and D. Seddon, (eds.): ***Free Markets and Food Riots: The Politics of Global Adjustment***, (Oxford, Blackwell).